

Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B.

Dr. MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

ces3secr@consejodeestado.gov.co

E. S. D.

TIPO DE PROCESO: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
RADICADO: 11001-03-26-000-2020-00055-00 (66052)
RECURRENTES: CADSA GESTIONES Y PROYECTOS S.A. Y OTROS

ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C., abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado especial de **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, de conformidad con el poder y certificado de existencia y representación legal adjunto, dentro de la oportunidad correspondiente procedo a **PRONUNCIARME FRENTE AL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN** interpuesto por el CONSORCIO PROGRESO BUGA, en el marco del proceso de la acción de grupo con radicado No. 76109-33-31-002-2008-00071-01, adelantado en primera instancia por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI y, en segunda instancia, por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA-SALA DE DECISIÓN, advirtiendo desde que la decisión se debe mantener incólume frente a mí representada, toda vez que esta no fue objeto de reproche por parte del recurrente. Lo anterior, de conformidad con los argumentos de orden fáctico y jurídico que se procederá a exponer.

I. OPORTUNIDAD

En primera medida, es importante señalar que el presente escrito se radica en la oportunidad correspondiente, comoquiera que el auto por medio del cual se admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte actora, con fecha del 27 de noviembre de 2023, se notificó personalmente por correo electrónico el día 05 de diciembre de 2023, tal y como se establece en los artículos 199 y 253 del CPACA, por ende, el término de que trata esta última disposición normativa, esto es, los diez (10) días siguientes a la notificación del auto, se vencerían el 11 de enero de 2024, en atención a la vacancia judicial de diciembre de 2023, encontrándonos en término para presentar el pronunciamiento que a continuación se desglosa.

CAPITULO I

FRENTE A LOS HECHOS ALEGADOS POR EL ACCIONANTE

Frente al hecho 1.: Es cierto, toda vez que de conformidad con el expediente que obra en el plenario, en efecto el día 14 de abril de 2008 fue interpuesta la acción de grupo por parte de los señores Azarías Alomia Riascos y otros contra La Nación – Ministerio de Transporte y otros. Acción que derivó de los daños sufridos con ocasión de la avalancha ocurrida el día 12 de abril de 2006, en la Carretera Alejandro Cabal Pombo (Buenaventura-Buga-Cali).

Frente al hecho 2.: Es cierto, el proceso correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura y se identificó con el radicado N°76109-33-31-002-2008-00071-01. Además, fue admitido en la fecha señalada por el recurrente.

Frente al hecho 3.: Es cierto. El Instituto Nacional de Vías –INVIAS contestó la demanda y formuló llamamiento en garantía respecto a las sociedades integrantes del CONSORCIO PROGRESO, el cual fue admitido por auto 069 del 24 de abril de 2009. Se aclara en este punto, que no se observa en el plenario que el CONSORCIO interpusiera recurso alguno contra la decisión.

Frente al hecho 4.: Es cierto, de conformidad con el expediente, el 16 de julio de 2009, el CONSORCIO PROGRESO contestó la demanda y el llamamiento en garantía formulado por el INVIAS.

Frente al hecho 5.: Es cierto, de acuerdo con la revisión del expediente, se observa que por auto de fecha 5 de octubre de 2017, el juzgado de conocimiento cerró la etapa probatoria y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

Frente al hecho 6.: Es cierto, con fecha 25 de septiembre de 2018 el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura profirió sentencia negando las pretensiones de la demanda.

Frente al hecho 7.: Es cierto, contra la sentencia la parte demandante formuló recurso de apelación.

Frente al hecho 8.: Es cierto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, profirió sentencia con fecha 20 de marzo de 2019, revocando la sentencia de primera instancia y declarando administrativa, civil, patrimonial, y solidariamente responsables a las entidades demandadas, también resolvió declarar probada la excepción de inexistencia de obligación contractual por falta de cobertura propuesta por mí prohijada, LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Frente al hecho 9.: Es cierto, de acuerdo con las documentales se observa la transcripción que hizo el apoderado del recurrente frente al fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 20 de marzo de 2019.

Frente al hecho 10.: Es cierto, en atención a las documentales obrantes en el expediente del proceso bajo radicado 76109-33-31-002-2008-00071-01.

Frente al hecho 11.: Es cierto, se evidencia la transcripción que hizo el apoderado del recurrente sobre la providencia del 15 de mayo de 2019.

Frente al hecho 12.: Lo esgrimido en el acápite no es un hecho, se trata de apreciaciones meramente subjetivas de la parte recurrente con relación a la presunta vulneración de derechos que tuvo su representado en atención al fallo proferido 20 de marzo de 2019. Para que lo manifestado adquiriera relevancia en el proceso, dicha parte debe cumplir la carga establecida en el artículo 167 del C.G.P., y de esta forma la demandante debe probar su dicho a través de los medios de prueba pertinentes, conducentes y útiles para tal fin.

FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL RECURRENTE:

Frente a la PRIMERA PRETENSIÓN: Me opongo a la solicitud de declarar la nulidad total de la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, con la participación de la Magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides, en fecha 20 de marzo de 2019, en el marco del proceso identificado con el número de radicación 76109-33-31-002-2008-00071-01, iniciado por AZARIAS ALOMIA RIASCOS Y OTROS contra el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y OTROS.

La fundamentación de la oposición se centra en que el recurrente limitó expresamente su recurso a los numerales CUARTO y QUINTO de la sentencia, que se refieren a la declaración y condena de las demandadas al pago de perjuicios a favor de los demandantes. En este sentido, no se formuló objeción alguna con respecto a otros apartados, específicamente el numeral TERCERO de la providencia, el cual declaró probada la excepción de inexistencia de obligación contractual debido a la falta de cobertura de la póliza.

Por lo tanto, sostengo que la decisión adoptada en el numeral TERCERO de la sentencia, que declara probada la excepción de inexistencia de obligación contractual por falta de cobertura de la póliza, no fue objeto de impugnación por parte del recurrente. En virtud de este hecho, la sentencia del 20 de marzo de 2019 debe mantenerse incólume, ya que no existe una impugnación válida que justifique su revisión o modificación.

Frente a la **SEGUNDA PRETENSIÓN**: Me opongo a que se profiera una nueva sentencia que reemplace la proferida el 20 de marzo de 2019 en virtud de los argumentos previamente expuestos. Debe considerarse que, en el evento en que este despacho acceda a la impugnación presentada, es fundamental reconocer que cualquier modificación o revisión debería limitarse únicamente a los aspectos específicamente impugnados, es decir, los numerales CUARTO y QUINTO de la sentencia en cuestión, por lo cual, el fallo será de infirmación parcial.

Esta restricción es imprescindible para preservar la coherencia y la integridad del proceso judicial, asegurando que solo las partes de la sentencia que han sido efectivamente objeto de disputa y revisión sean las que puedan ser modificadas. En consecuencia, sostengo que cualquier alteración o anulación parcial debe estar estrictamente circunscrita a los mencionados numerales, respetando así el principio de congruencia procesal y la integridad de las decisiones judiciales que no han sido objeto de impugnación.

CAPÍTULO II

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL CONSORCIO PROGRESO BUGA.

- **La sentencia proferida el 20 de marzo de 2019 deberá mantenerse incólume frente al numeral tercero.**

Resulta fundamental destacar la importancia de mantener la estabilidad y coherencia de las decisiones judiciales, garantizando seguridad jurídica sobre todo en aquellos aspectos que no han sido objeto de disputa en las fases subsiguientes del proceso. Esta premisa cobra especial relevancia en el contexto del presente caso, donde se observa que el numeral TERCERO de la sentencia emitida el 20 de marzo de 2019 ha quedado al margen de los cuestionamientos planteados por el recurrente en la sustentación del recurso extraordinario de revisión, por lo tanto, la omisión implica, de manera inequívoca, la aceptación tácita de su contenido y conclusiones. En tal sentido, es imperativo subrayar la necesidad de respetar y mantener incólume dicho segmento de la sentencia, al no haber sido este aspecto específico motivo de análisis o refutación en la etapa de revisión, consolidando así su validez y su fuerza ejecutoria dentro del marco legal vigente.

En consideración a lo anterior, es preciso resaltar lo establecido mediante sentencia del Consejo de Estado proferida en 2020 y que advierte lo siguiente:

*“(…) Este recurso, regulado en los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas, **ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas por incurrir en alguna de las***

causales que taxativamente consagra la ley. (...) Este recurso tiene como finalidad principal la revisión de las decisiones adoptadas injustamente, es decir, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores judiciales como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de derecho¹)
(Negrilla y cursiva fuera del texto original)

Claramente, a partir de los argumentos presentados, se percibe que el enfoque del recurrente estuvo circunscrito a cuestiones específicas: principalmente, la declaratoria de responsabilidad administrativa, civil, patrimonial y solidaria, así como la condena al pago de perjuicios en nombre de su representado. No obstante, es notable su omisión en lo que respecta a los otros numerales del fallo, de manera particular, y esto es de suma importancia, no se abordó, ni remotamente, el contenido del numeral TERCERO. Dicho numeral, esencial en el contexto de la sentencia, consagra la excepción de inexistencia de obligación contractual, fundada en la falta de cobertura temporal de la póliza N°1002598.

En consecuencia, esta ausencia de impugnación o cuestionamiento por parte del recurrente hacia este aspecto puntual implica, de manera implícita, un reconocimiento de su validez. Por ende, se exalta la imperiosa necesidad de mantener incólume tal apartado de la decisión judicial, dada su incontestada firmeza en el transcurso del proceso de revisión.

En adición a lo ya argumentado, resulta imperativo enfatizar que el recurso de revisión, propuesto por una de las partes o del Ministerio Público, se circunscribe exclusivamente a aquellos aspectos específicamente impugnados por la parte recurrente. Por lo tanto, no es procedente una modificación integral de la sentencia emitida el 20 de marzo de 2019 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, considerando que el recurrente no abordó, ni en mínima medida, la excepción probada a favor de mi representada. De esta manera, la sentencia en su conjunto no puede ser objeto de revisión o alteración en aquellos segmentos que no fueron expresamente cuestionados, garantizando así la estabilidad y seguridad jurídica para mí prohijada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

En línea con lo anterior, es relevante traer a colación lo expuesto por el Consejo de Estado mediante sentencia bajo radicado 17001-33-31-001-2009-01566-01(IJ)²:

La revisión eventual en materia de acciones populares y de grupo, cuyo conocimiento, como ya se precisó, se encuentra atribuido al Consejo de Estado como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, tiene como propósito único y fundamental la unificación de la

¹ Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo-Sala Veintisiete Especial de Decisión, C.P. Dra. Rocío Araújo Oñate, radicado 11001-03-15-000-2019-03970-00(REV), 03 de marzo de 2020.

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, radicado 17001-33-31-001-2009-01566-01(IJ), 03 de septiembre de 2013.

*jurisprudencia... se desprende con claridad que a esta clase de Revisión Eventual en modo alguno puede serle atribuida la naturaleza jurídica de recurso extraordinario y menos aún de recurso ordinario, no solo porque tal tipificación no fue prevista en la ley –allí se le refirió únicamente como un mecanismo–, sino porque, más importante aún, conceptualmente no corresponde a una clase de recurso sino más bien a un medio impugnativo especial o excepcional, en atención a las siguientes características y especificidades: a) No constituye una tercera instancia de decisión. La revisión eventual opera frente a sentencias y providencias en firme mediante las cuales se ponga fin al proceso de acción popular o al proceso de acción de grupo, respectivamente; desde este punto de vista difiere por completo de un recurso ordinario como la apelación e incluso del grado jurisdiccional de consulta. **b) El principio dispositivo rige la solicitud de revisión. Comoquiera que el trámite de la revisión se encuentra condicionado a la solicitud de parte o del Ministerio Público, los Tribunales Administrativos no están obligados a remitir al Consejo de Estado todas las sentencias y providencias pasibles de esta medida, sino únicamente aquellas en relación con las cuales se hubiere formulado, en oportunidad, la respectiva solicitud de revisión.** c) No se trata de un recurso extraordinario... d) No hay obligatoriedad en su trámite (Negrilla y cursiva fuera del texto original).*

En síntesis, la escasa impugnación selectiva del recurrente en el recurso de revisión, sin referirse a la excepción probada a favor de la representada, impide una revisión integral de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca de marzo de 2019, ello acorde al principio de congruencia. Es decir, la falta de cuestionamiento específico sobre este aspecto refuerza la imposibilidad de modificar totalmente la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca de marzo de 2019, garantizando así la coherencia y estabilidad de las decisiones judiciales dentro del marco del recurso de revisión.

- **Aplicación del principio de congruencia.**

En armonía con los argumentos previamente expuestos, resulta crucial para este honorable despacho considerar que el recurrente, en ninguna parte de su exposición, ya sea en el ámbito fáctico o jurídico, menciona la excepción de inexistencia de obligación contractual por falta de cobertura temporal probada y declarada a favor de mi representada. Por tanto, es de vital importancia que, en el evento de que se atiendan las solicitudes planteadas en el recurso, se realice únicamente una infirmación parcial de la sentencia impugnada. Lo anterior, dado que la decisión del recurso de revisión debe atender una estricta observancia del principio de congruencia, asegurando que cualquier decisión adoptada se alinee de manera precisa con los asuntos específicamente debatidos y cuestionados por las partes involucradas.

En tal sentido, el consejo de Estado, mediante sentencia del 2017³, se refirió al principio de congruencia en los siguientes términos:

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Cesar Palomino Cortés, radicación: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15), 26 de octubre de 2017.

“El principio de congruencia se erige como una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión”. (Negrilla y cursiva fuera del texto original)

En concordancia con la sentencia citada, el principio de congruencia emerge como una salvaguarda fundamental del derecho al debido proceso para las partes involucradas en el proceso judicial, principio impone al juez la restricción de emitir pronunciamientos exclusivamente basados en lo solicitado, probado y excepcionado durante el proceso, evitando así dictar decisiones que excedan o se desvíen de los límites establecidos por las partes (extra o ultra petita).

El deber del juez consiste en circunscribir su fallo a los elementos planteados por las partes en su argumentación, siendo imperativo que cualquier omisión respecto a las pretensiones formuladas se explique de manera clara y fundamentada. En este contexto, la aplicación rigurosa de este principio refuerza la necesidad de que, en caso de acogerse a las pretensiones del recurso, se proceda con una infirmación parcial de la sentencia, garantizando así la coherencia y adecuación a los límites establecidos por las partes y respetando el debido proceso. Así las cosas, es preciso traer a colación otro aspecto destacado de la sentencia bajo radicado 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15)⁴.

“Conforme a lo expuesto, en la sentencia que decida el proceso debe hacerse una motivación breve y precisa de las razones legales, constitucionales y doctrinales, si fuere el caso, indicando las disposiciones aplicadas, así como un examen profundo de las pruebas aportadas y las conclusiones que sobre ellas se hagan, para establecer si se concede o no el derecho pretendido, agregando, para el caso de las sentencias proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que a efectos de restablecer el derecho particular vulnerado o violado se podrán adoptar disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, o modificarlas o reformarlas. De igual forma, dicha providencia deberá producirse de acuerdo con los hechos y pretensiones indicados en el libelo demandatorio, así como con las excepciones que sean planteadas por la contraparte o aquellas que resulten debidamente probadas en el transcurso del trámite judicial, a fin de poder condenar al extremo demandado por el objeto solicitado y con base en la causa expuesta en ella”. (Negrilla y cursiva fuera del texto original)

En conclusión, es imperativo que la decisión se fundamente de manera concisa y precisa en las razones legales, constitucionales y doctrinales pertinentes, especificando las disposiciones aplicadas. Asimismo, se destaca la necesidad de que la sentencia sea acorde a los hechos y

⁴ Ibídem.

pretensiones presentados en el recurso de revisión interpuesto por el Consorcio Progreso Buga, de manera tal que se garantice una decisión congruente, coherente y acorde con el principio de congruencia y por contera con el debido proceso de mí representada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, dado que el numeral tercero por medio del cual se declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación contractual, no fue objeto de reproche por parte del recurrente.

- **El recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia, por ende, no debe ser modificado el numeral tercero de la sentencia del 20 de marzo de 2019.**

En relación con los fundamentos invocados en el recurso extraordinario de revisión, resulta claro que la parte actora centró su recurso únicamente en la declaración de responsabilidad y en la condena impuesta a su representado, el Consorcio Progreso Buga. Dado este enfoque, la excepción de inexistencia de obligación contractual por falta de cobertura no debe ser materia de debate, y aún menos sujeta a modificación respecto a lo ya resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Cabe destacar que el recurso de revisión no tiene como finalidad revivir términos procesales ni permite una reevaluación de las pruebas ya aportadas y examinadas. Por tanto, cualquier consideración fuera de los ámbitos específicamente impugnados excede los límites y propósitos de este recurso.

En primer lugar, conviene precisar que el recurso extraordinario de revisión está contemplado en los artículos 248 y ss. del CPACA, en donde se establece que este procede contra las sentencias ejecutoriadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos. Igualmente, en el artículo 250 *ibidem* se encuentran descritas las causales de revisión, así:

“ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

- 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.*
- 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.*
- 3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.*
- 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.*

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

Así pues, como se detalla, el recurso extraordinario de revisión está contemplado para cuestionar la legalidad, cosa juzgada y seguridad jurídica de los fallos judiciales, como consecuencia de falencias en la actividad probatoria como pruebas ilegales, falsas o que no se hayan logrado obtener durante el proceso judicial por fuerza mayor o caso fortuito. Adicionalmente, se contemplan otras causales como la existencia de una causal de nulidad o de cosa juzgada.

De manera clara y contundente, resulta innegable que este recurso únicamente procede bajo las causales previamente establecidas. Estas, de ninguna manera, posibilitan cuestionar el análisis probatorio realizado por el juez que conoció del asunto, ni mucho menos introducir alegaciones, pruebas o argumentos que no fueron presentados durante el desarrollo del respectivo proceso. Por lo anterior, el Consejo de Estado ha sostenido que el recurso extraordinario de revisión no es una tercera instancia, aduciendo:

13. En todo caso, con arreglo a lo prescrito en el artículo citado, las causales excepcionales de este medio de impugnación buscan restablecer el imperio de la justicia como supremo fin del derecho o del orden jurídico. **Significa lo anterior que no es una nueva oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, como tampoco para suplir la incuria o negligencia de las partes en el ámbito probatorio.** Se trata de un medio de impugnación excepcional, como quiera que permite poner en cuestión el principio de inmutabilidad de las sentencias que hayan hecho tránsito a cosa juzgada, fundado en situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que revisten tal gravedad que el legislador autoriza romper el principio de la cosa juzgada (*res iudicata pro veritate habetur*) y que están descritos en las ocho causales aludidas, que tienen la aptitud de cambiar los resultados de la decisión, en orden a evitar que prevalezca una situación de injusticia, por eventos como falsedad, error, dolo o la aparición de documentos determinantes que hubiesen alterado de manera sustancial la providencia adoptada. Igualmente, la sentencia es revisable cuando medie una causal de nulidad originada en el fallo que se recurre, cuando este no admitiese recurso de apelación.

14. En otras palabras, la revisión no tiene por finalidad corregir errores in iudicando, ni tampoco reabrir el debate procesal para volver a valorar el acervo probatorio aportado por las partes o decretado por el juez en la respectiva instancia, ya que los recursos ordinarios fueron concebidos para ello. En tal virtud, está proscrito utilizar este mecanismo extraordinario como si se tratara de otra instancia dentro del proceso ordinario, de ahí que no sea admisible que por su intermedio se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del proceso⁵.

En otra oportunidad, afirmó:

“El recurso de revisión, como extraordinario que es, sólo tiene cabida en los precisos casos que señala la ley y sobre la base de que se interponga dentro del término que este establece. Como no constituye una tercera instancia, que sería contraria al sistema procesal que rige en Colombia, el recurrente no puede mediante el recurso suplir las deficiencias de orden probatorio en que se incurrió en el proceso cuya sentencia quiere que sea revisada o en sus alegaciones jurídicas o remediar omisiones cometidas en defensa de los intereses de la parte que resultó desfavorecida.

*La regla general, en el recurso de que se trata, es la posibilidad de desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que ampara a las sentencias res iudicata pro veritate habetur, demonstrando plenamente que esa sentencia estaba fundada en una realidad procesal contraria a la verdad, que fue demostrada con pruebas falsas o que tal verdad no pudo ser acreditada en el proceso no por descuido, omisión o negligencia de la parte interesada, sino por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, en cuya virtud las pruebas pertinentes no pudieron ser allegadas al proceso, y además en ambos casos, que de no haber mediado esas circunstancias imprevistas e irresistibles para el interesado, la decisión habría sido otra*⁶.

Es claro entonces que el recurso de revisión no puede utilizarse para reabrir el debate procesal y pretender que se realice una nueva valoración del acervo probatorio, en tanto que está contemplado para cuestionar la legalidad que reposa sobre los fallos judiciales a través de unas causales específicas y taxativas contempladas en la ley.

En consonancia con lo expuesto, se observa que el recurrente no solicitó revisión alguna respecto a la excepción de inexistencia de obligación contractual por falta de cobertura temporal, propuesta por mi representada. Por lo tanto, el actual escenario procesal no es adecuado para reabrir un análisis probatorio sobre este particular, especialmente considerando que la excepción en cuestión ya fue probada y resuelta en su momento procesal oportuno. Este hecho refuerza la noción de que

⁵ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Rad. 45705 del 2 de agosto de 2019, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

⁶ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Rad. 2018-00081 del 16 de julio de 2021, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

el recurso de revisión no debe ser entendido ni utilizado como una tercera instancia, sino como un mecanismo excepcional que no está destinado a reexaminar aspectos ya resueltos y debidamente fundamentados en las instancias anteriores.

CAPÍTULO IV

PETICIÓN

En virtud de lo expuesto solicito respetuosamente que el H. Consejo de Estado al resolver el recurso disponga:

PRIMERO: NEGAR LA NULIDAD TOTAL de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 20 de marzo de 2019, al no encontrarse petición alguna en lo relativo al numeral tercero del fallo recurrido que declaró probada la excepción denominada “Inexistencia de la obligación contractual por falta de cobertura” a favor de mí representada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

CAPÍTULO V

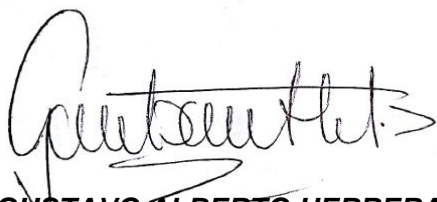
ANEXOS

- Poder especial otorgado al suscrito.
- Certificado de Existencia y Representación Legal de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.

II. NOTIFICACIONES

- El suscrito y mi representada podrán ser notificados en la Calle 69 No. 4-48, Of. 502 de Bogotá, y en el correo electrónico: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.